SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 14/2013

Recomendación N°	14/2013
Autoridad Responsable	Secretario de Educación
Expediente	1VQU-0098/2012
Fecha de emisión/	27 DE AGOSTO DE 2013
HECHOS	
<p>El agraviado V1, menor de edad, se encontraba inscrito en el tercer grado de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, ubicada en la cabecera municipal de Rioverde, San Luis Potosí.</p> <p>En la denuncia que presentó Q1, madre de la víctima, señaló que el 22 de marzo de 2012, durante el horario de receso escolar, su hijo sufrió una caída desde el árbol que se encuentra localizado en el patio central del citado plantel educativo, al cual subió sin que se hubiera advertido algún tipo de vigilancia por parte de los profesores o del personal que ahí labora.</p> <p>La quejosa manifestó que su hijo al caer se golpeó muy fuerte en el rostro, por lo que fue necesario su traslado al Hospital Regional de Rioverde, donde fue atendido en el área de urgencias, siendo diagnosticado con fractura maxilofacial. Posteriormente se le informó que ese lugar no tenía la especialidad de cirugía que requería su hijo, por lo que se le sugirió que acudiera con un especialista.</p> <p>Por tal motivo, V1 fue atendido en la “Clínica de Especialistas Facial & Dental”, donde se le realizó una cirugía debido al traumatismo maxilofacial, edema facial, fractura nasal deprimida, subluxación dental antero superior y heridas faciales que presentaba, cuyos gastos que ascendieron a la cantidad de \$67,700.00 (Sesenta y siete mil setecientos pesos 00/100 MN).</p> <p>La quejosa refirió que ella cubrió el costo total de los gastos médicos para que V1 pudiera salir de la clínica, por lo cual solicitó un préstamo y empeñó un predio; sin embargo, a pesar de las acciones realizadas por el cuerpo docente del plantel educativo de referencia, así como por las rifas realizadas por los miembros del Sindicato Magisterial, solamente la han apoyado con la cantidad de \$7,270.00 (Siete mil doscientos setenta pesos 00/100 MN), por lo que pide mayor apoyo para cubrir los gastos médicos, ya que la omisión de vigilar a su hijo en el receso escolar, provocó una alteración en su salud.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ A la integridad y seguridad personales.
OBSERVACIONES	
<p>De la evidencia recabada se observó que, AR1 como la máxima autoridad en el citado centro escolar, tenía el deber de cuidado hacia los alumnos a su cargo, esto en salvaguarda de la seguridad e integridad personal, ya que se observó que V1 subió a un árbol ubicado en el patio de la escuela en el horario de receso escolar, sin que se haya advertido que existiera vigilancia por parte del personal docente o administrativo de la escuela para cuidar a los niños, disuadir que escalasen al árbol, e incluso circundarlo para evitar accidentes.</p> <p>Este deber de cuidado obligaba a AR1 como autoridad escolar, a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía</p>	

el deber de actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar que cualquiera de los alumnos resultara lastimado, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte.

Además, obra en el expediente de mérito, que fue después de acontecido el accidente del menor V1, que AR1 implementó un programa de vigilancia con el personal a su cargo, para que se estuviera pendiente de los menores durante el horario escolar, sobre todo en el recreo, situación que también se debió prever con antelación.

Es el caso que el 22 de marzo de 2012, cuando V1 se encontraba en el receso escolar del turno matutino de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, subió al árbol que se encontraba en el patio central, ya que éste no tenía ninguna cerca ni barrera que impidiera a los niños escalarlo; aunado a lo anterior, se observó que no se había implementado un programa de vigilancia por parte de personal docente o administrativo de ese centro educativo.

Ahora bien, es preciso señalar que AR1 solicitó el apoyo de sus compañeros docentes, padres de familia y miembros del sindicato de maestros para recaudar fondos y apoyar al agraviado, incluso entregó a la quejosa la cantidad de \$7,270.00 (Siete mil doscientos setenta pesos 00/100 MN); sin embargo, de manera institucional no se advirtieron acciones efectivas para solventar el pago total de la reparación del daño, o bien para brindar apoyo a V1.

Se evidenció que AR1, fue omisa en llevar a cabo acciones efectivas para garantizar la protección de la integridad física de V1, vulnerando lo establecido en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual en el presente caso no ocurrió ya que no se realizaron las acciones necesarias para que se garantizara la protección de la integridad física de V1, ni para vigilar las áreas de esparcimiento dentro del plantel educativo.

El derecho de los menores a que se proteja su integridad, es un derecho fundamental consistente en que los niños gozarán de una protección especial, de oportunidades y servicios y de todas aquellas medidas concernientes a su cuidado en atención al interés superior del menor, lo cual incluye el estado físico de los planteles educativos en donde se encuentren, atendiendo además al deber de cuidado que los directores y docentes tienen respecto de los menores, durante el horario escolar.

Se considera que AR1 vulneró los derechos humanos de V1, al desatender su función pública como directora de la escuela primaria, ya que una de sus obligaciones es garantizar, como a todos los educandos, su integridad física y psicológica, sobre la base del respeto a su dignidad e integridad, como lo previenen los artículos 1, párrafo tercero; 3, párrafo segundo, fracción II inciso c); 4, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas, extender el alcance de los mismos, y para formar parte de un diálogo entre Corte y organismos defensores de derechos humanos, lo cual

se inscribe en la protección más amplia y extensiva de los derechos en consonancia con lo que establece el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, se observó que se vulneró en agravio de V1, lo establecido en los artículos 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 3.2, 19.1, 19.2 y 28.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los Principios 1, 7 y 8 de la Declaración de los Derechos del Niño, que en términos generales establecen que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, y que las instituciones educativas deberán implementar medidas para evitar cualquier afectación a su integridad personal, durante el horario de sus actividades escolares.

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 56 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se considera pertinente que la Contraloría Interna de esa Secretaría de Educación, inicie una investigación administrativa, para determinar la responsabilidad en que hubiere incurrido AR1 y de ser el caso, se apliquen las sanciones que correspondan conforme a los hechos descritos en la presente, tal como lo prevé el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, por lo que es importante que la autoridad educativa tome en cuenta las consideraciones que se han señalado en la presente Recomendación para que se agreguen al expediente administrativo que corresponda.

En otro aspecto, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, los que establecen la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado.

Asimismo, con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y las obligaciones que se contraen del mismo, así como del respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que repare el daño ocasionado, que se traduzca en la realización de acciones efectivas para cubrir los gastos médicos de V1.

SEGUNDA. Gire las instrucciones a efecto de que el Órgano de Control Interno de esa Secretaría inicie una investigación administrativa sobre los presentes hechos, remitiéndole también copia de la presente Recomendación para que se tomen en cuenta las consideraciones que en ella se exponen.

TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación al personal docente y administrativo de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, en materia de prevención, protección civil, seguridad escolar y derechos humanos.